

# ECUADOR DEBATE 110

Quito-Ecuador • Agosto 2020

ISSN 2528-7761 / ISBN 978-9942-963-54-3

|   |         |
|---|---------|
| PRESENTACIÓN  | 3/6     |
| <b>COYUNTURA</b>  |         |
| • Pandemia y economía en la coyuntura electoral<br><i>Julio Echeverría</i>  | 7/18    |
| • Conflictividad socio-política: Marzo–Junio/2020   | 19/24   |
| <b>TEMA CENTRAL</b>   |         |
| • Un país conectado a un respirador:<br>Ecuador y la crisis provocada por el COVID-19<br><i>Luis Castro y Jaime Fernández</i>   | 25/60   |
| • La epidemia actual del coronavirus y sus aspectos sociales y culturales<br><i>H. C. F. Mansilla y Erika J. Rivera</i>   | 61/76   |
| • Perú: la Pandemia, la dicotomía Economía-Vida<br>y el no retorno a la normalidad<br><i>Hugo Cabieses Cubas</i>  | 77/94   |
| • <i>It's Always Been Business First</i> : Breve análisis del discurso<br>de las organizaciones empresariales españolas y chilenas ante las políticas<br>para frenar el impacto del COVID-19<br><i>Alejandro Osorio Rauld y José Reig Cruaños</i> | 95/112  |
| • La economía mundial, la pandemia y las perspectivas<br><i>Oscar Ugarteche, Alfredo Ocampo y Carlos de León</i>  | 113/131 |
| • Una mirada crítica sobre las tecnologías de red en tiempos de pandemia<br><i>Peter Bloom y Loreto Bravo</i>   | 133/144 |
| <b>DEBATE AGRARIO RURAL</b>   |         |
| • El mercado agroalimentario ecuatoriano:<br>hacia un programa de investigación<br><i>Patric Hollenstein</i>  | 145/159 |
| <b>ANÁLISIS</b>   |         |
| • El actual pensamiento liberal-democrático en la filosofía política<br>y las ciencias sociales bolivianas<br><i>Erika J. Rivera</i>  | 161/178 |

- La Ciencia Física Decimonónica en Ecuador y la promesa de abundancia 179/197  
*Estefanía Carrera*

## **RESEÑAS**

- La utopía del oprimido. Los derechos de la Pachamama (naturaleza) y el Sumak Kawsay (buen vivir) en el pensamiento crítico, el derecho y la literatura 199/202
- Trazos de sangre y fuego. Bionecropolítica y juvenicidio en América Latina 203/206

# COYUNTURA

## Pandemia y economía en la coyuntura electoral

Julio Echeverría

*La crisis económica y sanitaria enmarcan el momento político actual, las maneras como ...la economía del capitalismo global, al que estamos articulados develando además las profundas desigualdades y la exclusión de grandes actores de la población; el modelo de producción y consumo, los procesos de deslocalización productiva aparecen como los más afectados por la pandemia. El análisis de Coyuntura apunta a describir y comprender dos líneas de entrada a la problemática. La una apunta a mirar el actual proceso socio histórico, como el resultante de tendencias de mediana y larga duración que se venían configurando en las últimas décadas aunque fuertemente afectada por la presencia avasalladora de la pandemia y la crisis sanitaria que ésta desata. La otra enfoca los posibles efectos de las transformaciones, en mucho forzadas por la pandemia, en la próxima coyuntura electoral del Ecuador.*

*Es observable una fragmentación del sistema de partidos, lo que no puede ser confundido con la pluralidad de tendencias políticas, esta fragmentación está asociada al personalismo y a la caída de la construcción colectiva de programas. La tendencia de disolución resultante de esta fragmentación afecta al conjunto de los actores, estos extreman la diferenciación de propuestas, con lo cual se generan situaciones de polarización, como método de construcción antagonista de la política. Dos eventos centrales en el análisis tiene relación con la movilización y armisticio neutralizante de Octubre 2019 y la presencia de la pandemia; estos han contribuido a fragmentar aún mas el espectro de los actores políticos que se están presentando para la contienda electoral del 2021, la estructura semántica y política que se conformó en los diez años de correísmo, que se ha tratado de desmontar en estos últimos años puesta a prueba en las elecciones de Febrero y que posiblemente permitirá definir el nuevo escenario y nuevo ciclo político.*

### Introducción

**E**n este análisis de coyuntura, desarrollaremos dos líneas argumentativas. La primera apunta a mirar el actual proceso socio histórico como resultante de tendencias de mediana y larga duración que se venían configurando en las últimas décadas y que se proyectan a futuro; una línea de argumentación que apunta a describir modificaciones de la estructura del desarrollo socioeconómico y político. En esta dirección es altamente relevante el impacto que está provocando la presencia de la pandemia del COVID-19, en las con-

diciones actuales de la globalización. La segunda línea de argumentación, se enfoca en los posibles efectos de estas transformaciones en la próxima coyuntura electoral en el Ecuador. En ambos casos se trata de identificar las posturas de los actores frente al contexto socio histórico presente. Por un lado, cómo las tendencias estructurales abren espacios o posibilidades para los arreglos coyunturales y las propuestas electorales en disputa; y por otro, cómo se ubican las distintas posturas respecto de esas tendencias. Entre ambas, se definen tanto los posibles alineamientos electorales, así como las definiciones de

programa que entran en disputa. El proceso electoral se nos presenta entonces, como laboratorio que permite descifrar las fuerzas y las tendencias en juego.

## El nuevo escenario global

Si existe algo que caracteriza a la coyuntura global es la presencia avasalladora de la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria que esta desata. El virus actúa como un agente que contamina al conjunto del sistema, se transmite con mucha eficiencia y con una tasa de crecimiento exponencial. Lo que inicialmente fue una epidemia localizada en la región de Wuhan en China, progresivamente se esparció hasta convertirse en pandemia de difícil control por parte de los sistemas nacionales de salud pública.

En esta última fase de la globalización que tiene, en la crisis financiera del 2008 su último punto de quiebre, se definen líneas de tendencia que en parte explican la actual confluencia entre crisis económica y crisis sanitaria. En este periodo, se profundizaron tendencias que ya se venían venir desde mucho antes, la deslocalización de procesos productivos y de transferencia de *know how*, desde las economías avanzadas de occidente hacia las economías del sur, en la búsqueda de abaratar costos y mejorar en competitividad, lo que fortaleció a estas economías y en particular a la economía china. El modelo chino viene acusando desde el 2008 tasas de crecimiento más altas que las economías occidentales, al explotar sus ventajas comparativas: el bajo costo de la fuerza de trabajo, las lábiles regulaciones en materia de sostenibilidad y pro-

tección ambiental y la rígida disciplina que lo comanda. La alteración zoonótica que está en el origen de la pandemia del COVID-19 responde justamente a las lógicas extractivistas y depredatorias del capitalismo que alteran los frágiles equilibrios entre sociedad y naturaleza y que afectan la sostenibilidad de sociedades y economías.

Los efectos de la pandemia alteran esta dinámica del capitalismo global. La pandemia ha profundizado la crisis que ya se venía manifestando en el 2019, con la reducción de las tasas de crecimiento de la economía global, la congestión y casi bloqueo del enlace entre capitales financieros y sectores productivos, que empujaba hacia serios déficit fiscales de las economías nacionales, que eran compensados mediante endeudamiento público y sobre explotación de recursos naturales, lo que terminaba dando vida a procesos productivos de tecnología obsoleta caracterizados por su alto impacto ambiental.

El COVID-19 ha puesto bajo presión a los sistemas de gestión y gobierno de la economía, a las políticas económicas monetarias y financieras y a su paradigma de gobernanza, centrado sobre pactos de estabilidad y de disciplinamiento de las cuentas macro fiscales, una línea que se reforzó después de la crisis financiera del 2008. Se trata de modelos de estabilización, dirigidos a reducir todo gasto considerado marginal o superfluo, entre los cuales se contaban, justamente, los sistemas de investigación y producción de conocimiento, los de salud, educación y protección social.

La pandemia ha sido más efectiva en afectar la dinámica del capitalismo que las fuerzas que lo impugnan, las

cuales parecerían bloquear coyunturalmente su funcionamiento y permitir que opere la capacidad innovadora del mismo sistema. Lo que sí parece estar claro es que el COVID-19 no emerge como una variable exógena a la lógica del modelo económico, sino que es la expresión concentrada de los procesos de sobreexplotación extractivista y de desmantelamiento de los sistemas de alerta y prevención de alteraciones o crisis, que puedan afectar la sostenibilidad ambiental y social del planeta.

Pero; al que más ha afectado por la pandemia es al modelo de producción y consumo, los procesos de deslocalización productiva. Las actuales cadenas de valor son interdependientes y altamente globalizadas. El virus afecta a este sistema de transacciones y de movilidad de recursos de la economía, interrumpe las cadenas de valor deslocalizadas, que se relacionan justamente mediante la transportación masiva aérea y marítima.

Sin embargo, como toda crisis, esta podría también ser la puerta de ingreso hacia una economía que replantee las formas de producción y de consumo hacia modelos más sostenibles social y ambientalmente. El bloqueo de la economía global obliga a revisar las cadenas de valor deslocalizadas, tanto en la

producción de materias primas, como en los sectores de la manufactura y los servicios, algo que podría conectarse con la demanda de cambios sustanciales en las modalidades del consumo y, en las mismas construcciones de sentido sociales y políticas.

## La movilización social y la pandemia

Si para octubre del 2019 se apreciaba una onda de movilizaciones a escala global que cuestionaba los desequilibrios distributivos agudizados desde la crisis financiera del 2008, ahora, las desigualdades se han profundizado por el impacto de la pandemia, sin que se observe grandes focos de conflicto o de resistencia. La estrategia sanitaria del confinamiento obligado, tiene un impacto mayor en los sectores más vulnerables de la economía, lo cual debilita y golpea seriamente a cualquier fuente de impugnación.<sup>1</sup>

La relación entre crisis sanitaria y crisis económica se presenta con una fuerza inusitada que no aparecía en el ciclo político anterior. La estrategia del confinamiento, dirigida a cortar las líneas de contagio, detener la expansión del virus e impedir el colapso de los sistemas de atención se ha visto rebasada, en la mayoría de países de la región, lo

---

1. El impacto logrado por el confinamiento al detener bruscamente las actividades económicas retrata el mapa de la inequidad global, que se aprecia más en los ámbitos locales de los estados nacionales y en las barriadas y suburbios de las grandes aglomeraciones urbanas. Una caída del -9,1% en el PIB regional, un retroceso de una década en los ingresos per cápita de los países latinoamericanos (CEPAL, 2020a). El número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones en el 2020, el desempleo alcanzará al 13.5% de la población, esto es 5.4% más que en 2019. En términos de comercio internacional, las previsiones de la CEPAL calculan que “el valor de las exportaciones regionales se contraería -23% este año y el de las importaciones -25%, cifra también superior al -24% anotado durante la crisis financiera de 2008-2009” (CEPAL, 2020b).

que ha develado la precariedad de las infraestructuras sanitarias y en general de las capacidades de observación, prevención, contención e intervención.<sup>2</sup> Lo que sí ha producido es una virtual retirada de la sociedad a sus ámbitos más íntimos y privados, una efectiva neutralización de las formas de movilización tradicionales, que hacían de la calle y de las aglomeraciones masivas su punto de fuerza. Es probable que todo esto cambie, pero hasta que ello acontezca, las formas de expresión y de politicidad parecerían migrar hacia la digitalización y virtualización, fenómeno tendencial que ya se venía anunciando con fuerza antes de la presencia del COVID-19.

Al afectarse las cadenas de valor vinculadas a la movilidad global, la crisis apunta hacia procesos de relocalización y de redefinición de la globalización, se afectan seriamente las lógicas de la competitividad que se movían sobre esta estructuración, lo cual presiona seriamente sobre los enlaces entre ámbitos financieros y productivos. Se trata de una reestructuración capitalista de grandes proporciones, que viene acompañada de tendencias ambivalentes y situaciones complejas en el campo político, nuevas demandas de sentido, pero también nacionalismos, xenofobias, populismos de diverso signo, fenómenos alimentados por el deterioro aún mayor de las economías más vulnerables.

## **El contexto coyuntural y las elecciones del 2021**

¿Cuánto y de qué manera la pandemia del COVID-19 está incidiendo en la actual configuración del proceso político en el Ecuador? ¿Qué nuevas condiciones emergen para alterar el escenario que se tenía previsto antes de su presencia disruptiva?

Las intensas movilizaciones de octubre que enfrentaron al movimiento social y al gobierno concluyeron en una suerte de armisticio o de pacto de no agresión que no definió claros desenlaces. Para los distintos actores, en particular para el movimiento de resistencia, el evento electoral de 2021 aparecía como el momento en el cual esas definiciones podrían replantearse y tal vez alcanzarse. En la coyuntura de octubre de 2019, estaba en juego la consolidación de un frente de fuerzas dirigido a impulsar la resistencia a la línea del ajuste estructural impulsada por el gobierno de Alianza País (AP), representado por el presidente Lenín Moreno, un gobierno al que le ha resultado extremadamente difícil desprenderse de su matriz de origen, la expresada por el ex presidente Rafael Correa, algo que se venía reconociendo bajo el membrete de “desmontaje del correísmo”.

Apenas posesionado en 2017, el presidente Moreno estableció un radical giro de timón en el manejo de la políti-

---

2. La pandemia vuelve patente el carácter que ha venido asumiendo la globalización en esta última década: alta conexión entre economías, como son las trazadas por las tecnologías de la comunicación y los sistemas financieros y, retrasos y obsolescencias de la gobernanza global, lo cual se evidenció en la lenta capacidad de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno chino, donde emerge el virus; la colosal descoordinación entre estados y gobiernos, con respuestas diferenciadas y en algunos casos contradictorias.

ca y de la economía. Sus dos primeros años los ocupó en una línea de apertura política dirigida a dismantelar el entramado político que garantizaba la impunidad de los actos de gobierno de la administración del ex presidente Correa, y en poner al descubierto los graves casos de corrupción del periodo. La implicación directa de su vicepresidente Jorge Glas en la trama de corrupción construida por la empresa brasilera Odebrecht, cuando este era vicepresidente de Correa, abrió el camino para descubrir que su gobierno había sido pieza fundamental de una red de corrupción más extensa en la cual se habían comprometido ingentes recursos públicos. El caso Odebrecht puso al descubierto la existencia de un fenómeno de corrupción sistémica, que implicaba al conjunto del entramado institucional y que tenía su punto de origen en el mismo proceso de definición constitucional instrumentalizado en la llamada “Constitución de Montecristi”. Esta operación abrió una verdadera “caja de pandora”, que se volvió más visible aún en el contexto del “estado de emergencia” al legitimar la exoneración de controles y abrir las llaves para la administración discrecional de los fondos públicos.

La denuncia que Moreno venía realizando sobre la corrupción del periodo correísta se vio opacada más adelante por la aparición de graves indicios de corrupción en su propio Gobierno. La pandemia puso el foco sobre la gestión del sistema de salud, donde justamente se evidenció la entrega de cuotas de poder en la administración del sistema hospitalario a cambio de acuerdos políticos, en los cuales se vieron involucrados asambleístas y mafias que tra-

dicionalmente han usufructuado del chantaje a los gobiernos de turno.

En la actualidad, la corrupción aparece en los sondeos de opinión como uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. La recurrencia de este fenómeno en el proceso de “descorreización” sugiere su relación con el diseño institucional que regula las formas de la contratación pública, con las debilidades de los sistemas de fiscalización y control debido al diseño del hiperpresidencialismo, lo que apunta necesariamente hacia algún tipo de reforma constitucional.

Una vez enfrentado el aspecto político del desmontaje institucional del correísmo, en particular en aspectos referidos al control político, el gobierno apuntó en dirección a la reversión del modelo económico. También aquí el camino ha sido accidentado. Para el 2017, año de la transferencia de poder de Correa a Moreno, la situación económica presentaba signos de franco deterioro, que según el Gobierno radicaba en el creciente déficit fiscal y en la dinámica de endeudamiento a la cual el Gobierno debía acudir para sostener el ingente gasto público que se había consolidado en los 10 años de gestión de Alianza País, cuando los ingresos fiscales contaban con el sustento de un precio elevado de los combustibles.

Para el gobierno de Moreno el enfrentamiento a la crisis económica pasaba por poner bajo control la tensión entre déficit fiscal y endeudamiento; en el corto plazo, la estrategia apuntó a lograr márgenes de liquidez para enfrentar la crisis, mientras hacia el mediano plazo, el objetivo se dirigía a lograr que la relación gasto público-financiamiento logre



sostenibilidad, sustituyendo la “lógica de Estado por la lógica de mercado”; esto es, romper con el Estado-centrismo que caracterizó al correísmo y abrir la economía al sector privado y a la inversión externa. Bajo esta perspectiva se explica la maniobra dirigida a eliminar los subsidios a los combustibles y transitar hacia un esquema de subsidios focalizados, una iniciativa que despertó la resistencia violenta del movimiento indígena y de otros actores como el mismo correísmo y que condujo a la paralización del país durante jornadas de intensa movilización y protesta. La coyuntura de la movilización dejó abierto el interrogante acerca de si se había producido una confluencia de posturas entre indígenas y correísmo, o si se trató de una instrumentalización de los unos sobre los otros.

La movilización de octubre arrinconó al Gobierno y lo obligó a negociar la retirada de su propuesta. Al hacerlo, creó la imagen de un consolidado aglutinamiento de fuerzas y de actores de oposición. El movimiento social volvía a descubrir que la movilización en las calles era el mejor espacio para la acumulación de fuerzas, que la lógica del antagonismo y de la confrontación era productiva de poder, que la polarización como método de construcción de política calzaba bien en un país cuya economía presentaba indicadores de deterioro cada vez más agudos. Sin embargo, como a toda tormenta le sigue la calma, pasada la dinámica de la movilización, aparecerían las diferencias, en algunos casos profundas, que se escondían tras la movilización. La pregunta que quedó flotando después de octubre es si la necesidad de enfrentar la diná-

mica del ajuste, planteada por parte del Gobierno y que despertó la resistencia, sería suficiente para superar las diferencias y reticencias que traían consigo los distintos actores. Las diferencias atravesaban en particular al actor protagónico, el movimiento indígena, pero también a otros actores que tuvieron participación decisiva en la revuelta, como fueron las fuerzas del correísmo y de la izquierda tradicional.

Por el lado del Gobierno, la convicción de la necesidad de enderezar el curso de la economía mediante el disciplinamiento de las cuentas fiscales (la eliminación de subsidios generalizados resumía esta opción), se mantenía como una línea de acción irrenunciable, a pesar de haber dado un paso atrás en las negociaciones para superar el conflicto.

Es en este contexto político enrarecido y de escasa definición que emerge la pandemia del COVID-19, un acontecimiento no previsto por ninguna de las fuerzas en juego y que plantearía desafíos inéditos. La pandemia vendría a revolverlo todo. Por un lado, detuvo drásticamente cualquier intención o posibilidad de movilización o protesta, pues la declaratoria de estado de excepción debido a la emergencia sanitaria y el miedo al contagio afectaba directamente la capacidad de aglutinación de fuerzas a la que pudo haber apelado el movimiento, frente a la insistencia en la línea de ajuste. Para el Gobierno, significó recuperar tiempo y capacidad de maniobra, al eliminarse la resistencia que podía provenir del movimiento social. El perfilamiento de la línea del ajuste encontraba el camino expedito para su realización. En el transcurso de los meses de vigencia del



estado de excepción, se tomaron medidas que insistían en la misma dirección adoptada por el Gobierno antes de la movilización de octubre: la parcial eliminación de los subsidios, antes duramente contestada, y la renegociación de la deuda, dirigida a ampliar los márgenes de liquidez, a incidir por tanto en la ecuación déficit-endeudamiento que es la que orientaba la conducta gubernamental.

En este contexto, a la oposición no le queda otra salida que apostar todo al futuro evento electoral, en condiciones en las cuales se vuelve más compleja la compactación de fuerzas que se consiguió en la movilización de octubre. El impacto de la pandemia, la respuesta del Gobierno mediante el decreto de estado de excepción, el confinamiento obligado de la población, congeló cualquier intento de movilización.

Por su parte, la cercanía de la coyuntura electoral modifica el piso de sustentación del proceso sociopolítico. Todo evento electoral despierta apetitos e insta dinámicas de competencia que pueden afectar esa acumulación de fuerzas. Ya no será el calor de la movilización en las calles que genera la imagen de compactación la que prime, ahora será la búsqueda de posicionar líneas de acción que convoquen a las urnas a votantes que no necesariamente estuvieron implicados de manera directa en la confrontación política. Se expresará ahora ese actor anónimo que presenció la revuelta desde sus dispositivos tecnológicos y que, en muchos casos, observó el enfrentamiento de octubre como una guerra urbana y no como un evento en el cual se disputaban programas y políticas.

## **De la fragmentación a la polarización**

El correísmo tuvo un efecto distorsionante que ocultó la crisis de representación que había madurado en la última década del siglo XX y en la primera de este siglo. La misma emergencia de la revolución ciudadana podría ser caracterizada como expresión de esa crisis; un viraje del sistema político hacia el hiperpresidencialismo, que consolidaba una tendencia de reforzamiento del poder presidencial, que se venía ya evidenciando como opción de salida de las recurrentes crisis de gobernabilidad. Esta salida, que acontece por el lado del decisionismo, terminó por volver intrascendente a la función de la representación en los procesos de construcción decisional. Con el correísmo, la Asamblea se transformó en agencia de tramitación de leyes requeridas por el Ejecutivo, en el contexto de la virtual eliminación de las funciones de control y fiscalización. Su resultado, la construcción de la mejor plataforma de producción sistémica de corrupción, la conformación de una maquinaria (la legislatura), y unos dispositivos (los órganos de control), funcionales al uso discrecional del poder por parte del Ejecutivo. En este contexto, caen los partidos como canalizadores de amplias voluntades políticas. En su lugar, se aprecia un fenómeno de progresiva fragmentación de fuerzas y de actores que dificulta la construcción programática del sistema político.

La transición política desde el gobierno de Correa al de Moreno alteró estos equilibrios; si en la gestión de AP los partidos de minoría fueron virtual-

mente excluidos del proceso decisio-  
nal, con la escisión interna al partido  
hegemónico, producida en la transición  
a Moreno, se divide esta organización  
y la consecución de mayorías para la  
aprobación de leyes requerirá de la  
anuencia de actores minoritarios pero  
con alta capacidad de chantaje, lo cual  
reinstaura la posibilidad de negociacio-  
nes espurias entre el Ejecutivo y las dis-  
tintas minorías legislativas; reaparece  
así la lógica partidocrática que se había  
mantenido de alguna forma neutraliza-  
da por la presencia aplastante del deci-  
sionismo hiperpresidencial.

La fragmentación del sistema de  
partidos no puede ser confundida con  
la pluralidad de tendencias políticas  
que el sistema requiere para legitimarse  
como tal. La fragmentación está asocia-  
da al personalismo y a la caída de la  
construcción colectiva de programas.  
Es justamente en ausencia de esta cons-  
trucción que aparece el personalismo  
de los liderazgos; estas posturas no son  
procesadas internamente en las organi-  
zaciones políticas, sino que emergen  
por fuera de los partidos para alcanzar  
legitimidad propia, en un contexto de  
alta mediatización, lo cual desata la  
fragmentación como fenómeno do-  
minante. Esta se constituye en "lógica  
de funcionamiento" del sistema de re-  
presentaciones, que se ve reforzada en  
las contiendas electorales; el sistema  
electoral fomenta y promueve esta ten-  
dencia. Al garantizar el derecho a la  
participación, el espectro partidario se  
amplía incentivando la diferenciación,  
pero esta se traduce en fragmentación.  
La diferenciación de posturas es neces-  
aria en cuanto enriquece la construc-  
ción programática; la fragmentación,  
en cambio, disuelve dicha posibilidad.

Frente a esta tendencia de disolu-  
ción que afecta al conjunto de los acto-  
res, estos extreman la diferenciación de  
propuestas; se genera así el terreno pro-  
picio para el apareamiento de la pola-  
rización como método de construcción  
antagonista de la política. El sistema  
recurre a la base constitutiva de la polí-  
tica que es el enfrentamiento, sustituye  
la función de la producción consensual  
por la de la polarización, lo cual afecta  
la misma configuración sistémica. Es  
este el sentido de la crítica al correísmo  
cuando se afirma que su lógica es la de  
la desinstitucionalización.

Incentivado por el sistema electoral,  
se promueve la agregación y la cons-  
trucción de alianzas sin que esto su-  
ponga adecuación a la perspectiva pro-  
gramática. La normativa electoral exige  
que los partidos demuestren cobertura  
nacional, lo cual los obliga a pactar con  
actores locales que no necesariamente  
comparten sus lineamientos o visio-  
nes programáticas: lo hacen con el fin  
de cumplir con los requisitos exigidos  
para garantizar su presencia en el terri-  
torio. Luego de realizadas las eleccio-  
nes, los acuerdos no necesariamente se  
mantienen o tienen que ser reforzados  
mediante la transacción de cuotas de  
poder por fuera de las orientaciones de  
programa. El sistema electoral favorece  
esta tendencia hacia la fragmentación y  
el personalismo.

Por su parte, la participación del  
elector tiende también a fragmentarse en  
la selección de sus preferencias: se pre-  
mia con el voto a actores vinculados a la  
cercanía de la localidad del elector que  
demuestren identidad con los problemas  
de la vida cotidiana, lo cual hace del  
perfil personal del candidato su mayor

punto de atención, afectando la necesaria abstracción que supone la construcción programática. El sistema electoral no incentiva una adecuada conducción de politicidad, y esta, luego del proceso electoral, se traduce en fragmentación de las representaciones, lo cual erosiona y debilita el proceso decisonal.

### **Construyendo el escenario electoral**

Los dos eventos a los que hemos hecho relación en el análisis (movilización y armisticio neutralizante en octubre y presencia de la pandemia COVID-19), han contribuido a fragmentar aún más el espectro de actores políticos que se presentarán en la contienda electoral de febrero de 2021. Si atendemos a la tradicional caracterización izquierda-derecha, podríamos afirmar que en ambas coaliciones se han producido importantes modificaciones. Se observa una tendencia de caída de los liderazgos tradicionales, que hasta antes de octubre aparecían como opciones con posibilidades de convocar adhesiones electorales. En el campo de la derecha, dos de sus líderes reconocidos atraviesan por momentos complejos: Jaime Nebot (PSC), ha renunciado a su posible candidatura, mientras que Guillermo Lasso, líder de CREO, acusa una seria caída de aceptación, según registran los sondeos de opinión. En la coalición de izquierda, es significativa la ausencia de Rafael Correa, por estar impedido legalmente de participar en la contienda electoral. El carácter caudillesco de los liderazgos en ambas coaliciones, dificulta el apareamiento de actores que puedan sustituirlos.

En el sector indígena, se evidencia un importante cambio generacional que sustituye a los liderazgos tradicionales del movimiento. Fue justamente en el contexto de las movilizaciones de octubre que se produce la emergencia de tres líderes con fuerte arraigo en sus localidades: Yaku Pérez (actual Prefecto de la Provincia de Azuay elegido en las seccionales de 2019), Leonidas Iza (líder del Movimiento Indígena de Cotopaxi), y Antonio Vargas (Presidente de la CONAIE, de procedencia amazónica), quienes dibujan un cuadro de diferenciación en el sector que podría conducirlo a su fragmentación, en un movimiento que no tiene claro los procedimientos internos de selección de candidaturas. El conflicto surgió entre Pachakutik brazo político del movimiento y la CONAIE, organización que canaliza la expresión de las bases del movimiento. Pachakutik se decantó por Yaku Pérez, lo que generó tensiones con la CONAIE, quien exigía mayor participación de las bases en la selección de candidaturas, alterando de esta forma los procedimientos de representación previstos reglamentariamente, todo lo cual termina por debilitar la opción electoral del movimiento indígena.

Pero; si de actores emergentes se trata, cabe señalar la presencia de Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Moreno, quien construyó su imagen en el contexto de su protagonismo frente a la pandemia del COVID-19. Algunas encuestas de opinión señalaban que Otto aparecía con una considerable intención de voto, pero días antes de inscribir su posible candidatura, la declinó. Distintas consideraciones podrán argüirse sobre este acontecien-

to, pero seguramente la más consistente tiene que ver con las dificultades que experimentó para deslindar su figura del desgaste de un gobierno salpicado por numerosos casos de corrupción, en particular los referidos al manejo de la emergencia sanitaria y a la gestión del sistema hospitalario.

El cuadro se completa con la postulación de dos figuras que canalizan sentimientos de desafección hacia la política de partidos: el empresario Álvaro Noboa, que intentó correr por sexta ocasión como candidato a la presidencia, y el expresidente Abdalá Bucaram, seriamente comprometido con casos de corrupción y que refleja el alto grado de descomposición al que ha llegado el accionar político en el Ecuador.

Junto a este espectro de actores, se añade una miríada de candidatos menores que giran en torno a estas tendencias, los cuales, en este escenario de fragmentación y polarización, podrían pasar a posiciones protagónicas en medio de las incertidumbres del escenario electoral.

Si este es el cuadro de posicionamiento de los actores, la pregunta que emerge tiene que ver no solamente con las respuestas a la crisis económica y sanitaria; hay otra dimensión que entra en juego y es la posibilidad de cierre del ciclo político hegemónico por el llamado “correísmo”, y por tanto, la posibilidad de ingresar a otro ciclo, que suponga la definición de nuevos referentes de política, que se abren justamente por la presencia de la actual conjunción entre crisis económica y crisis sanitaria.

El ciclo del correísmo podría ser visto como un intento por producir un

programa de izquierda con proyección fundacional que progresivamente fue derivando hacia formas caudillistas y personalistas, reforzadas desde la semántica constitucional. La lógica antagonista de la polarización que caracterizó a la gestión de Correa, hizo de los contenidos antipolíticos y decisionistas presentes en la Constitución de Montecristi, los puntos de apoyo para legitimar el discrecionalismo personalista que produjo corrupción y descomposición institucional, tal como se ha venido verificando gracias a los procesos de investigación y administración de justicia aplicados en estos últimos cuatro años.

Es esta estructura semántica y política que se conformó en los diez años de correísmo y que se ha tratado de desmontar en estos años, la que se pone a prueba en las elecciones de febrero y que permitirá definir el nuevo escenario y el nuevo ciclo político. Lo que se verificará en el proceso electoral del 2021, es justamente cuánto esta estructura ha sido afectada, por las operaciones de descorreización realizadas hasta ahora y, de qué forma la campaña electoral podrá legitimar la salida definitiva de esa semántica y de sus derivaciones. ¿Hay producción de liderazgos y madurez ciudadana que lo permita?

### **Del escenario a la construcción programática**

Si este es el escenario y el contexto institucional en el cual se desarrollará el evento electoral, la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo político dependerá tanto de las habilidades para conjugar las tensiones entre fragmentación y polarización, como de la claridad de la

propuesta programática que pueda producirse. Al respecto, surgen algunas interrogantes: ¿Cómo puede revertirse la lógica de la fragmentación y la polarización para lograr la ‘producción de programa’ que el país requiere, más allá de las naturales diferenciaciones políticas? ¿Es posible enfrentar la polarización en el contexto de un sistema electoral que la incentiva? ¿Es factible sustituir el enfrentamiento antagonista por la construcción consensual?

Una visión realista y pragmática podría hacerlo si pone atención a los espacios de maniobra creados por la combinación de ambas crisis, la económica y la sanitaria.

La crisis sanitaria introduce tensiones en las conexiones e interdependencias globales de las cadenas de valor, conduce a su reconfiguración, a readequar las relaciones entre financiamiento y producción; su drástica contención produce deflación de demanda, desempleo y deterioro social, que obliga a renegociar la ecuación déficit público-endeudamiento. Si esto acontece en el corto plazo, en el mediano y largo plazo es posible apuntar hacia líneas estratégicas que ubiquen la sostenibilidad social y ambiental, como un prerrequisito para cualquier actividad económica productiva y tecnológica.

Este parecería ser el problema central en la definición de programa y por tanto en el posicionamiento de los actores frente al proceso electoral. Los alineamientos ideológicos pueden ser útiles en esta dirección, así como las semánticas que mueven el comportamiento de los actores y su reformulación para atender estas líneas prioritarias. Solamente este nivel de reflexión

podría neutralizar las tensiones hacia la polarización, a la cual acuden los actores espontáneamente.

La construcción de programa requiere de grandes esfuerzos de reflexión desde los distintos campos político actoriales. La delimitación de los espacios de maniobra que permite o posibilita esta conjunción entre crisis económica y sanitaria, replantea las conexiones entre competitividad económica y equidad y entre ambas y los desafíos de la sostenibilidad. Si observamos el posicionamiento de los actores bajo estas premisas aparece el concepto de competitividad como bandera de las posturas que van del centro hacia la derecha del espectro político: seguridad jurídica, atracción de capitales, equilibrio fiscal, reducción de gasto. La disciplina macrofiscal es el objetivo central de esta postura, de ella depende la consecución de flujos de financiamiento que puedan sustentar la inserción global de la economía. Para este enfoque la preocupación por la equidad, y la sostenibilidad no es relevante, el posicionamiento competitivo en la implacable lógica de mercado podría sacrificar la equidad y la sostenibilidad. La presencia del COVID-19 y la crisis sanitaria obliga a replantear el sentido de este concepto; la misma crisis sanitaria emerge condicionada por una dinámica de crecimiento del capitalismo que no reconoce límites sociales ni ambientales; la crisis obliga a repensar la competitividad desde una perspectiva que no se reduce al equilibrio fiscal, obliga a interactuar con los conceptos, de equidad y sostenibilidad.

Si miramos el concepto de equidad, este aparece en cambio como semánti-

ca que caracteriza a los actores que van del centro hacia la izquierda. Para esta línea es central la pugna distributiva y no la competitividad global; pone énfasis en la redistribución conducida y garantizada por el Estado, al cual, contrario a la postura de la derecha, hay que fortalecer. La coyuntura de la crisis sanitaria replantea también de manera radical este principio, lo complejiza. En particular en el caso del Ecuador, la subestimación de la disciplina macrofiscal ha conducido a una situación de alta vulnerabilidad financiera para enfrentar la crisis, afectando justamente el objetivo de equidad que se quisiera alcanzar. Relacionar adecuadamente disciplina macrofiscal y equidad parecería ser el desafío.

El concepto de sostenibilidad aparece como marginal para estas dos posturas. Sin embargo, es probable que este sea “el concepto emergente” que da respuesta a la disyuntiva actual. Sostenibilidad ambiental dado que el desate del COVID-19 tiene su origen en la zoonosis, en la arremetida al ambiente producida por la lógica depredadora del extractivismo. Sostenibilidad social porque cada vez más las sociedades deben dotarse de capacidades de respuesta a crisis y amenazas que se derivan de su complejización. La sostenibilidad, un concepto que se vuelve central para el nuevo modelo, a condición de que pueda interactuar con las otras premisas conceptuales, que aparecen como opciones excluyentes o enfrentadas. Es este seguramente el concepto que caracterizará al nuevo ciclo político.

La campaña electoral podría ser el espacio en el que se depuren las posturas extremas polarizadas, y ello podría

darse en el debate entre los candidatos, sobre los exiguos espacios de manobra que dejan la conjunción de la crisis económica y sanitaria. Es por ello, que la campaña electoral se presenta entonces, como un verdadero laboratorio político en el cual se pone en juego el programa que el país necesita para enfrentar esta coyuntura de crisis que, seguramente, es la más grave de toda su historia republicana. Un escenario posible y seguramente ausplicable sería el de una segunda vuelta electoral donde se produzca un verdadero pacto colectivo. La visión de futuro, que se requiere cuando se trata de iniciar un nuevo ciclo político, obliga a pensar al país en el mediano y largo plazo y, a partir de ahí, a buscar soluciones para el corto plazo, un ejercicio saludable de proyección estratégica.

## Bibliografía

- CEPAL  
2020a. “Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la pandemia: caerá -9,1% en 2020”. Recuperado de: <https://bit.ly/31cZq8R>.
- 2020b. “Comercio internacional de América Latina y el Caribe caerá 23% en 2020 debido a los efectos de la pandemia”. Recuperado de: <https://bit.ly/2FxeHsK>.